

A nivel general, el Poder Judicial del Estado de Nuevo León cuenta con información sobre siete líneas estratégicas. Ha implementado acciones para mejorar el acceso a la justicia como servicios de justicia itinerantes y la accesibilidad de su sitio web para personas con discapacidad.

Aún es necesario reforzar la generación de información desagregada, así como la interseccionalidad de las políticas para mejorar el acceso de la justicia a poblaciones LGBTI+, indígenas, infancias, migrantes, etc.

A continuación se desglosan los resultados por **cada una** de las líneas estratégicas.



1. Generación de información estadística útil y accesible



Tiene un registro de los casos ingresados, las sentencias dictadas, órdenes de protección otorgadas, así como de su personal y capacitaciones.

En algunos casos (como órdenes de protección y de personal) se registran algunas variables sociodemográficas (sexo y edad), pero es necesario fortalecer el registro desagregado y obligatorio de información sociodemográfica (etnia, discapacidad, identidad y orientación sexual) para la identificación de brechas en el acceso a la justicia a poblaciones históricamente discriminadas.

Es necesario publicar y difundir la información desagregada que se genere para que sea accesible a la ciudadanía.



2. Participación ciudadana



El Poder Judicial reporta colaborar con instituciones gubernamentales, barras de abogados, universidades y algunas organizaciones civiles.

Sin embargo, es necesario contar con mecanismos y convenios de colaboración con organizaciones de la sociedad civil, movimientos y colectivas que trabajan por mejorar el acceso a la justicia a poblaciones históricamente discriminadas.



3. Capacitación judicial



El Poder Judicial, en 2021, llevó a cabo actividades de capacitación a su personal en materia de PEG, Derechos Humanos, discapacidad, NNA y transparencia. Estas capacitaciones no contaron con una evaluación.



4. Fortalecimiento institucional: Unidades de transparencia



El Poder Judicial cuenta con una Unidad de Transparencia, con una normatividad y presupuesto generales, sin embargo, aún no tienen un diagnóstico que dé cuenta de las necesidades de su Unidad para cumplir con sus obligaciones de transparencia.



5. Política de transparencia proactiva



El Poder Judicial no cuenta con una Política de Transparencia proactiva, ni con criterios para generar y publicar información de interés público con perspectiva de género y derechos humanos. Sin embargo, ha implementado acciones incipientes para mejorar el acceso a la información a las personas con discapacidad, mediante la reestructuración de su sitio web.



6. Publicación de sentencias



El Poder Judicial tiene lineamientos propios para la generación de versiones públicas de sentencias, también tiene un registro de las sentencias que publicó en el año 2021 y ha integrado filtros en el buscador para localizar sentencias (tipo de órgano, juzgado o sala, materia, juicio, acción, fallo, juez o magistrado y fecha de resolución).

Es necesario incorporar filtros de búsqueda para localizar sentencias de poblaciones históricamente discriminadas.



7. Prácticas innovadoras



El Poder Judicial ha implementado servicios de justicia digital como convivencias familiares virtuales, chatbot y herramientas de accesibilidad para personas con discapacidad visual y auditiva.

Además ha implementado los *Módulos Judiciales 2.0* a través de los cuales se busca acercar los servicios de justicia a municipios que no tienen sede judicial, proporcionando servicios de mediación, conciliación y vinculación.

GLOSARIO

1. Generación de información estadística útil y accesible: Analiza si el Poder Judicial tiene información estadística (datos) de calidad, útil y accesible, sobre los servicios que brindan (registro de los casos ingresados, sentencias dictadas, órdenes de protección otorgadas) y sus estructuras (el personal que trabaja ahí y la capacitación que se les brinda), de manera que permita identificar y diseñar políticas para erradicar las barreras para el acceso a la justicia para mujeres, personas indígenas, con discapacidad, LGBTI+, infancias, entre otras poblaciones históricamente discriminadas.

2. Participación Ciudadana: Analiza si el Poder Judicial tiene mecanismos de participación ciudadana, y si además estos mecanismos le permiten vincularse con la ciudadanía (colectivas, movimientos y organizaciones que acompañan a poblaciones históricamente discriminadas) para co-construir mejores soluciones a las políticas y la forma de impartir justicia.

3. Capacitación Judicial: Analiza si el Poder Judicial imparte capacitaciones de calidad al personal, en materia de género y derechos humanos, así como sobre sus obligaciones de transparencia, que cumplan con criterios mínimos de idoneidad (tipo de actividades, duración, perfil de las docentes, criterios de evaluación), de manera que se garantice el derecho a la justicia de todas las personas.

4. Fortalecimiento institucional: Unidades de transparencia: Analiza si el Poder Judicial cuenta con una Unidad de Transparencia fortalecida, con un marco normativo que sustente su creación y funcionamiento, los recursos suficientes y un diagnóstico de sus necesidades para que puedan cumplir con sus obligaciones, pues estas son el vínculo principal entre el Poder Judicial y la diversidad social.

5. Política de transparencia proactiva: Analiza si el Poder Judicial ha establecido Políticas de Transparencia Proactiva para que la información que publica sea útil, comprensible y difundida por los medios adecuados, de manera que cada día haya un mayor conocimiento sobre nuestros derechos y cómo hacerlos exigibles.

6. Publicación de sentencias: Analiza si el Poder Judicial cumple con la obligación de publicar sentencias accesibles, comprensibles y actualizadas, que permitan a la ciudadanía comprender las decisiones de los jueces, conocer nuestros derechos. pero también monitorear y evaluar la calidad de la justicia que se imparte, en especial cuando se trata de poblaciones históricamente discriminadas.

7. Prácticas innovadoras: Analiza si el Poder Judicial ha implementado prácticas innovadoras (programas, servicios, actividades, protocolos) para mejorar el acceso a la justicia, tanto por medios virtuales como a través de servicios itinerantes, que acerquen la justicia a las poblaciones históricamente discriminadas y alejadas de la justicia.